

Caso

Melanie Pereira Peroni, Byron Dale, Francis Hoffman y William Garra.

Vs.

Republica Federativa de Chirilagua.

MEMORIAL EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO.

INDICE

	Pág.
I. BIBLIOGRAFÍA.....	3
i. Fuentes Doctrinarias y Otros Documentos Consultados y Citados.....	3
ii. Instrumentos Internacionales.....	4
iii. Sistema Interamericano.....	4
a) Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	4
b) Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	6
c) Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	6
iv. Sistema Europeo.....	7
a) Casos Contenciosos de la Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	7
v. Organización de las Naciones Unidas.....	7
II. ABREVIATURAS.....	8
III.- EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS	9
República Federativa de Chirilagua.....	9
La Papeleta Democrática.....	9
El Facebookazo.....	10
Radical Radio	10
Radio Su-versión.....	11
Medidas Administrativas y Penales.....	11
Proceso ante el Sistema Interamericano.....	13
IV. APERSONAMIENTO.....	13
V.- ASPECTO DE FONDO.....	13
A.- PRESUNTA VIOLACION DEL DERECHOS A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN. Art. 13 de la CADH, en relación con obligaciones emanadas por el Art. 1.1. de la misma.....	13
A.2.-Idoneidad y Finalidad de la Restricción.....	14
A.3.- Estricta formulación de la norma que consagra la limitación o restricción....	15
A.4.- Potestad de Chirilagua de Administrar el Espectro Radioeléctrico.....	17
A.5.-Estricta formulación de la norma que consagra la limitación o restricción (legalidad penal).....	22
B.-EL ESTADO DE CHIRILAGUA HA RESPETADO ART. 8 DE LA CADH, en relación con las obligaciones emanadas por los Arts. 1.1.....	24
B.1.-Eficacia e Independencia de los Órganos del Estado.....	25
B.2.- Imparcialidad de la COFERETEL.....	27
B.3.- Imparcialidad de los Órganos Judiciales.....	28
B.4.- Garantías mínimas de los procesos judiciales.....	29
B.5.- Comunicación previa y detallada de la acusación formulada y tiempo y de los medios adecuados para su defensa.....	29
B.6.- Doble Instancia.....	31
C.- EL ESTADO DE CHIRILAGUA HA RESPETADO ART. 25 DE LA	32

CADH, en relación con las obligaciones emanadas por los Arts. 1.1.....	
VI.-Petitorio.....	38

I. BIBLIOGRAFÍA

i. Fuentes Doctrinarias y Otros Documentos Consultados y Citados.

- .- Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe (AMARC-ALC).Doc. Comunicación a la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en torno a su decisión de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV).
- .- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Manual de Protección de la Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano. San José de Costa Rica, 2.004.
- .- Claudio Nash Rojas y Claudia Sarmiento Ramírez. Reseña de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anuario de Derechos Humanos 2009. Versión PDF.
- .- Damián M. Loreti. La Libertad de Expresión y los Estándares Internacionales. Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Sociales de Argentina (CELS) Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos y Libertad de Expresión en México. San Luis Potosí, S.L.P, mayo de 2006.
- .- Humberto Quiroga Lavié, Derecho Constitucional Latinoamericano, Universidad Nacional Autónoma de México. 2.009. Versión PDF
- .- Jesús María Casal. Acceso a la Justicia, Universidad por la vigencia efectiva de los Derechos Humanos. Autor Konrad- Andenauer- Stiftung, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Canadian International Development Agency, Instituto Interamericano de Derecho Humanos (IIDH).
- .- Jesús María Casal. “Los DH y su protección” Universidad Católica Andrés bello. Venezuela. 2006.
- .- Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DH. Derecho Internacional de los DH. Primera Edición. Bogotá Abril 2004.
- .- Teresa Freixes Sanjuán. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las Libertades de la Comunicación. Trabajo publicado en la Revista de Derecho Comunitario Europeo nº 15, 2003.
- .- Toby Mendel CIDH. Presentación,, “Normas Internacionales sobre la Regulación de la Radiodifusión” 18 de Julio del 2.007. Pág.2

.- Manuel E. Ventura Robles. La Jurisprudencia de la CorteIDH en materia de acceso a la Justicia e impunidad, Taller Regional sobre Democracia, DH y Estado de Derecho. Capítulo II. 5 y 7 de Septiembre del 2005.

.- Manuel García Pelayo. “Estado” Obras Completas, Madrid 1991, capítulo IV Pág. 6

.- Luis Alberto Huerta Guerrero. El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos análisis del artículo 8° de Documento de Trabajo de la Comisión Andina de Jurista, con la colaboración de Luis Enrique Aguilar Cardoso.

.- La Libertad De Expresión en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documento. Elaborado por el equipo de trabajo del Programa sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de la Asociación por los Derechos Civiles. Versión PDF.

.- Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis, El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos, en “La aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década (1994-2005)”, Buenos Aires, CELS y Del Puerto.

ii. Instrumentos Internacionales

.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.

.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

.- Convención Interamericana de Derechos Humanos.

.- Protocolo Adicional A La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales.

.- Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con su Primer Protocolo Facultativo.

iii. Sistema Interamericano.

a) Corte Interamericana de Derechos Humanos.

.- Caso Aritz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C No. 182, párr. 131.

.- Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párrs. 124,125, 127.

.- Caso Blake Vs. Guatemala, Sentencia de 24 de enero de 1998, Serie C No. 36, párr. 102.

.- Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador, Sentencia de 26 de noviembre de 2008 Serie C No. 189, párr. 93.

.- Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C No. 69 párr. 164.

.- Caso Cantos Vs. Argentina, Sentencia de 28 de Noviembre de 2002, Serie C No. 97, párr. 52,55.

.- Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C No. 52, párrs. 121, 161.

.- Caso Cesti Hurtado Vs Perú, Sentencia de 29 de septiembre de 1999, Serie C No. 56, párrs. 125, 149.

.- Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 91.

.- Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C No. 79 párr. 111, 112, 113,114

.- Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie C No. 68, párrs. 101, 102

.- Caso Fairén Garbí y Solís Corrales Vs. Honduras, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, párr. 90

.- Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 30 párrs. 74, 77.

.- Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 92.

.- Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 112, 113, 117,118, 120, 121,123, 137.3.b)

.- Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de 2002, Serie C No. 94, párr. 150, entre otros.

.- Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, Sentencia 6 de febrero de 2001 Serie C No. 74, párrs. 136, 137, 152.

.- Caso Kimel Vs. Argentina, Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, párrs. 51, 54, 56, 57, 63, 71, 78, 87 y 88.

.- Caso La Última Tentación de Cristo Vs. Chile, Sentencia de fondo de 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73, párr. 69.

.- Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C No. 119, párrs. 125,192.

.- Caso López Álvarez y otros Vs. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 129.

.- Caso Masacres de Ituango Vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 148, párr. 339

.- Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párr. 206

.- Caso Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134 párr. 211

.- Caso Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala, Sentencia de 8 de marzo de 1998, Serie C No. 37, párrs. 149, 164

.- Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C No. 135, párrs. 79, 85, 124, 145 y 180.

.- Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111, párrs. 82, 95, 124.

.- Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párrs. 65, 66.

.- Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia del 31 de enero del 2001, Serie C No. 71 párrs. 70, 71, 73, 75, 89, 90, 93.

.- Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158 párr. 107.

.- Casos Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 90.

b) Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

.- CIDH. Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Octubre de 2000, en el 108 período ordinario. Principio 12.

.- CIDH. Informe sobre el Terrorismo y DH. 22 octubre 2002. párr. 278

.- CIDH Informe Sobre La Compatibilidad Entre Las Leyes De Desacato Y La Convención Americana Sobre DH 88º Periodo de sesiones informe anual 1994 Washington, D.C. 17 Febrero 1995, Capítulo V.

.- CIDH. Comunicado de Prensa, Preocupa a La CIDH La Libertad de Expresión en Venezuela, 25 De Mayo De 2007.

c) Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

.- CorteIDH. OC-5/85, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. párr 34, 35, 39,42 y 70.

.- CorteIDH. OC-6/86, La expresión "leyes" (Art. 30 de la CADH) del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6. párr 15, 22 y 46

.- CorteIDH. O/C- 9/87. “Garantías Judiciales en Estado de Emergencia” del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9. párr. 23, 24, 27 y 28.

.- CorteIDH. O/C 11/90 Excepciones al agotamiento de Recursos Internos” del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11. párr. 28 y 36.

.- CorteIDH. OC-16/99 “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17. párr. 117.

iv. Sistema Europeo.

a) Casos Contenciosos de la Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

.- Caso Lingens Vs. Austria, Sentencia de 8 de Julio de 1986, Serie A, N° 103, párr. 40, 41.

.- Caso Handyside Vs. United Kingdom, sentencia de 7 de Diciembre de 1976, Series A N° 24, párr. 49

.- Caso The Sunday Times Vs. United Kingdom, Sentencia de 29 de Marzo de 1979, Serie A N° 30, párrs. 59, 65,78

.- Caso Oberschlick Vs. Austria, Sentencia de 23 de Mayo de 1991, Serie A N° 204, párr. 57

.- Caso Castells Vs. España, Sentencia del 23 de Abril de 1992, Serie A N° 236, párr. 42.

.- Caso Motta Vs Italia. Sentencia de 19 de Febrero de 1991, Series A N°. 195-A, párr. 30

.- Caso Ruiz Mateos Vs. España, Sentencia de 23 Junio de 1993, Serie A N° 262, párr. 30

Organización de las Naciones Unidas.

.- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura” Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985.

.- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales” Aprobada y proclamada por la

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura, París del 27 de noviembre de 1978

II. Abreviaturas

La Republica Federativa de Chirilagua: El Estado ó Chirilagua

CorteIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Párr. / Párrs. : Párrafo(s)

Art. / Arts.: Artículo(s)

Comité de Derechos Humano: Comité de DH

Comisión de derechos Humanos de la Naciones Unidas: Comisión de DH de la ONU

ONU: Organización de las Naciones Unidas

Lit.: Literal

OEA: Organización de los Estados Americanos

Convención Americana de Derechos Humanos: CADH

DH: Derechos Humanos

dem: (Idéntico)

Sr.: Señor.

Sra.: Señora.

C: Contra.

Vs.: Versus.

Pág. / Págs.: página (s).

PIDCP: Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos.

OC: Opinión Consultiva.

Convención de Viena: Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

Vol.: Volumen.

Nº. : Número.

TEDH: Tribunal Europea de Derechos Humanos.

Pág. M: Páginas del Memoria

Cit: cita

DADDH: Declaración americana de los derechos y deberes del hombre

PIDESC: pacto Internacional de los derechos civiles y políticos

CEDH: Carta Europea de los Derechos Humanos

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

III.- Exposición de los Hechos

República Federativa de Chirilagua, (en adelante Estado o Chirilagua) su Capital Ceudópolis, es un Estado de renta media alta, con una democracia estable.

Chirilagua se ha mantenido incólume en cuanto a la ratificación de todos los tratados interamericanos de derechos humanos y es parte de los principales tratados de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), así como también participó en la negociación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante Carta de la OEA) en 1948, ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH) y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CorteIDH) el 9 de abril de 1980.

A mediados del año 2006, Atilio Escalante Norris (en adelante el Presidente) accedió a la presidencia de la República, contando con un apoyo del 60% de la población, el PCP y varios empresarios.

La Papeleta Democrática: En los últimos años en Chirilagua el clima de crispación política se ha acentuado debido a que seguidores del Presidente, conjuntamente con el Partido Chirilagüense Popular (PCP), han promovido una reforma constitucional para permitir un segundo mandato de este, por cuatro años adicionales. Esta consulta se haría con un escrutinio denominado “la Papeleta Democrática” (en adelante la Papeleta), que si bien la Constitución no lo reconoce como un mecanismo valido de reforma constitucional, lo establece como un mecanismo de consulta. Esta

papeleta sería escrutada, por el Tribunal Electoral de Chirilagua, en las elecciones generales para Diputados Federales en el año 2008.

El 10 de Marzo de 2008 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en las cuales se permitió la inclusión de la Papeleta. La coalición de gobierno tuvo una amplia victoria. Disturbios se presentaron en varias zonas del país, el saldo más violento se registró en San Pedro de los Aguados, una pequeña ciudad ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Cambacrópolis, en donde tres personas murieron producto de enfrentamientos entre grupos de opositores y oficialistas.

El Facebookazo: Los líderes opositores, Partido por la Renovación Democrática de Chirilagua (RDC) y varios sectores de opinión se opusieron abiertamente a la aprobación de la Papeleta, por considerar que esta consulta podría ser un medio de hecho para validar la misma, incumpliendo el régimen constitucional, permitiendo así un segundo mandato del Presidente. Dos meses antes de las elecciones, un grupo de estudiantes convocó a una marcha nacional e internacional y concentraciones que se denominó “el Facebookazo”, en contra de la iniciativa de la Papeleta a través de las redes sociales Facebook, Twitter y MySpace.

Esta se llevo a cabo se llevo a cabo el 3 de marzo de 2008, en varias de las marchas se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y seguidores del partido oficialista, así como enfrentamientos entre marchantes y miembros de la Guardia Federal. La situación más dramática se vivió en la población de San Pedro de los Aguados, allí, como producto de los disturbios, 6 personas murieron y 15 más resultaron heridas. Los principales canales de televisión presentaron los hechos como producto de la incitación al odio de clases e instigación a la violencia, promovida por parte de pequeños medios de comunicación de cobertura en lugares en los cuales se habían presentado los más graves hechos de violencia.

Radical Radio (antigua *Radio Cadena Básica*): Inició transmisiones en frecuencia modulada en abril de 1965. La emisora fue fundada en Cedralópolis por Byron Dayle y María Luisa Peroni. En el año 2000, María Luisa Peroni falleció, ante lo cual su hija, Melanie Pereira Peroni, la sucedió en sus roles de accionista y directora de la emisora.

En junio de 2001, la Melanie Pereira Peroni acudió a la Comisión Federal de Regulación de Telecomunicaciones (en adelante, COFERETEL) solicitando la aprobación del cambio de nombre de la emisora por el de *Radical Radio* y su reconocimiento como nueva titular de la concesión dado el fallecimiento de su madre, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, solicitud que fue respondida dando el visto bueno para el cambio de denominación, pero advirtió que en los registros aparecía una inconsistencia en cuanto a los nombres de los titulares de la concesión y de la representante legal de la emisora.

Radio Su-versión: Esta emisora de radio fue fundada por las Comunidades Sin Tierra de San Pedro de los Aguados (en adelante ACOSINTI), de las municipalidades de Cambacrópolis y San Pedro de los Aguados, participando en las únicas dos convocatorias realizadas por la COFERETEL. En ninguna de estas convocatorias, la propuesta de ACOSINTI fue aprobada. No se adjudicó ni prorrogó licencia alguna para operar en San Pedro.

En el 2002 ACOSINTI realizó un convenio de cooperación con Radical Radio. A través de estos medios, la población de San Pedro de los Aguados se enteró del Facebookazo, involucrándose directamente en los mismos.

Medidas Administrativas y Penales: El 5 de marzo de 2008, COFERETEL, inició una revisión de las concesiones de radio y televisión, solicitando la actualización de los datos y requisitos a todas las cadenas de radio y televisión, este órgano informó

que esta revisión era “una medida preliminar para la formulación de una política para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagnético y el pluralismo informativo”. El 6 de Abril de 2008, la COFERETEL, previo estudio de las emisoras de radio, solicito el cierre de las concesiones otorgadas a 40 emisoras de radio, 21 en amplitud modulada (AM) y 19 en frecuencia modulada (FM), por el incumplimiento de los requisitos de funcionamiento dispuestos por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones

El 25 de Junio de 2008, el Ministerio Público inicio un proceso de investigación e imputo a mas de 30 personas, entre ellos Byron Dayle (en adelante el Sr. Dayle), Melani Peroni (en adelante Sra. Peroni) y Francis Hoffman (en adelante el Sr. Hoffman) por la presunta comisión del delito de “hurto de bienes del Estado”, estos tres últimos conjuntamente con Willian Garra (en adelante el Sr. Garra) también fueron imputados por la presunta comisión de lo instigación a delinquir” y “difamación”.

El 14 de Julio de 2008, la oficina del Ministerio Público acusó formalmente a la Sra. Pereira, el Sr. Dayle y el Sr. Hoffman por el delito de hurto de bienes del Estado ante el Primer Juzgado Criminal de Delitos Federales. El 8 de Noviembre de 2008, el Primer Juzgado condenó como responsables de la comisión del delito de hurto de bienes del Estado a la Sra. Pereira y el Sr. Hoffman a dos años de prisión. En la misma sentencia el Juzgado sobreseyó al Sr. Dayle. La sentencia fue apelada por los condenados, y fue reiterada en todos sus extremos por el Tribunal Criminal de Apelaciones el 25 de Noviembre de 2008.

El 20 de Julio de 2008, el Ministerio Público acusó ante el Juez de conocimiento a la Sra. Pereira, el Sr. Dayle y el Sr. Hoffman por los delitos de instigación a delinquir y difamación en perjuicio del Presidente de la república. Mediante resolución del 15 de Septiembre de 2008, el Tercer Juzgado Criminal de Delitos Federales encontró

responsable de los delitos de instigación a delinquir y difamación a la Sra. Pereira y el Sr. Hoffman, condenados a seis meses de prisión, pena conmutable con el pago de una multa equivalente a USD 15.000, el Sr. Dayle fue absuelto de ambos cargos. Ambos apelaron a la Sentencia, ratificada la misma en fecha 1 de Octubre del 2.008.

El 25 de julio de 2008, la oficina del Ministerio Público acusó formalmente al Sr. William por los delitos de instigación a delinquir, difamación, y homicidio. El 23 de noviembre de 2008, el Tercer Juzgado Criminal de Delitos Federales lo condenó 12 años de prisión. La sentencia fue apelada y el Tribunal federal de Apelaciones, esta confirmó la condena mediante sentencia de 1 de Diciembre de 2008.

Proceso ante el Sistema Interamericano:

Fue sometido ante la jurisdicción de la CorteIDH el 25 de Diciembre de 2009, alegando la violación de los artículos (en adelante Art.) 8, 13 y 25 de la CADH

IV.- APERSONAMIENTO

El Estado no opone cuestiones preliminares y somete a consideración de la CorteIDH el presente memorial, en el cual se exponen los argumentos que demuestran la no violación y el tratamiento del espíritu de la letra de la CADH demandados por los Representantes de la Víctima. Por ende, se considera oportuno dar contestación de fondo a la demanda en base a los siguientes argumentos.

V.- ASPECTO DE FONDO

A.- PRESUNTA VIOLACION DEL DERECHOS A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN.

El Estado ha respetado Art. 13 de la CADH, en relación con las obligaciones emanadas por el Art. 1.1. de la misma

Para el Chirilagua, así como para la comunidad internacional, la libertad de expresión es la piedra angular en la existencia misma en una sociedad democrática¹. Es indispensable para la formación de la opinión pública², a esta función de comunicación se añade el derecho del público de recibirla³.

Si bien este derecho está plenamente reconocido en la mayoría de los instrumentos de protección de los Derechos Humanos (en adelante DH)⁴, entraña límites que pueden ser permitidos a los Estados, con todo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede estar sujeta a restricciones⁵, en particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por la CADH⁶. Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad que entraña para los medios de comunicación social y para quienes ejercen profesionalmente estas labores⁷.

A.2.- Idoneidad y Finalidad de la Restricción: El Art.13.2 lit a y b de la CADH abre la posibilidad de integrar restricciones al ejercicio a este derecho, tomando en cuenta que “los abusos al ejercicio del mismo pueden estar sujetos solo a responsabilidades ulteriores”⁸ por lo que “libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya

¹ TEDH. Caso Lingens Vs. Austria, párr. 41; Caso Handyside Vs. United Kingdom, párr. 49; Caso The Sunday Times Vs. United Kingdom, párr. 65; Caso Oberschlick Vs. Austria, párr. 57; Caso Castells Vs. España, párr. 42. CorteIDH. OC-5/85 “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Arts. 13 y 29 CADH), párr. 70; Caso La Última Tentación de Cristo Vs. Chile, párr. 69; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párr. 113; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, párr. 152.

² CorteIDH. OC-5/85, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Arts. 13 y 29 CADH) Párr. 70; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párr. 112; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, párr. 82; Caso Kimel Vs. Argentina, párrs. 87 y 88; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, párr. 131.

³ TEDH. Caso Sunday Times Vs. United Kingdom, párr 78.

⁴ DADDH Art. IV; CADH Art.13 y 14; PIDCP Art.19; CEDH Art.10.

⁵ CorteIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párr. 120; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, párr. 131; Caso Kimel Vs. Argentina, párr. 54; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, párr. 95; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, párr. 79.

⁶ CorteIDH. Caso Kimel Vs. Argentina, párr. 56; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, párr. 131.

⁷ CorteIDH. Caso Kimel Vs. Argentina, párr. 57.

⁸ Manual de Protección de la Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano CEJIL. Pág 78.

cometido”⁹. La expresión restricción alude a la conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión¹⁰.

La no renovación de las concesiones de 40 emisoras de radio, por no cumplir con los requisitos de funcionamiento dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones¹¹ y la conducta típica de la Sra. Pereira, el Sr. Hoffman y el Sr. Garra, y así lo determino el Primer Juzgado por hurto de bienes del Estado¹² conjuntamente con el Tercer Juzgado Criminal de Delitos Federales por Instigación a delinquir, difamación¹³ y por homicidio a este último¹⁴, sentencias apeladas y reiteradas por los tribunales superiores, por la estrecha relación entre los hechos acontecidos en el Facebookazo en fecha 3 de Marzo del 2008, donde 6 personas murieron y 15 más resultaron heridas¹⁵, son hechos que permiten al Estado hacer uso de su margen de apreciación.

En este contexto, hay que señalar, que son los Estados quienes pueden legislar sobre la interposición de los límites concretos y sobre la configuración del propio límite o injerencia, las sociedades democráticas poseen el mismo para decidir sobre la extensión de la injerencia, haciendo gran énfasis que la interposición de los límites no tiene un carácter obligatorio sino que son las autoridades internas quienes han de decidir sobre su interposición y configuración¹⁶.

A.3.- Estricta formulación de la norma que consagra la limitación o restricción:

Como ya se ha dicho anteriormente la libertad de expresión no es un derecho absoluto,

⁹ CorteIDH. OC-5/85, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Arts. 13 y 29 CADH), párr. 39.

¹⁰ CorteIDH. OC-5/85, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Arts. 13 y 29 CADH), párr 35; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, párr 79; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, párr 95; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párr. 120.

¹¹ Ver párr. 29 Caso Hipotético.

¹² Ver párr. 37 Caso Hipotético.

¹³ Ver párr. 38 Caso Hipotético.

¹⁴ Ver párr. 39 Caso Hipotético.

¹⁵ Ver párr. 8 Caso Hipotético.

¹⁶ TEDH. Powell y Rayner Vs. Reino Unido; TEDH. Asunto del régimen de la lengua en la educación en Bélgica.

puede establecerse restricciones, “que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, para determinar dichas responsabilidades es necesario que se cumplan tres requisitos: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger, ya sea los derechos a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.¹⁷

Del primer requisito el Estado siempre ha actuado dentro del orden legal interno, por un lado, la no renovación de las concesiones, que se inició con una revisión de las mismas en estricto apego a las normas internas de COFERETEL el 5 de Marzo del año 2.008, se debe al margen discrecional del Estado en el otorgamiento de las concesiones de conformidad con el Art.27 de la Constitucional y 92 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, así como también por su incumplimiento, para la formulación de una política garantizadora de la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro radioeléctrico y el pluralismo informativo¹⁸, lo que es igual para la CIDH al determinar que para “las asignaciones de radio y televisión deben considerarse criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”¹⁹.

En fecha 6 de Abril del mismo año, se dispuso a retirar 40 concesiones otorgadas a emisoras de radio, 21 en amplitud modulada AM y 19 en frecuencia modulada FM, entre ellos Radical Radio y Radio Su-versión.

Si bien el Art. 13.3 de la CADH, entiende como medida de restricción indirecta la administración arbitraria de “frecuencia radio eléctrica”, el Estado comprende esta

¹⁷ CorteIDH. O/C 5/85, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Arts. 13 Y 29 CADH), párr. 42; CIDH. Informe sobre el Terrorismo y DH, párr. 278; Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la convención americana sobre DH, Capítulo, V

¹⁸ Ver párr. 29 Caso Hipotético

¹⁹ CIDH. Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, Principio 12

premisa pero “en el caso de la renovación, no es suficiente que la emisora de cuenta del cumplimiento de aspectos administrativos, económicos y técnicos, sino también del efectivo cumplimiento de sus deberes profesionales, el respeto a la libertad de expresión e información y los compromisos de programación y responsabilidad social asumidos al obtener el uso de la frecuencia. Como contrapartida, es deseable que la evaluación sea hecha de forma abierta y pública, y por un organismo estatal independiente del gobierno que cuente con activa participación de la ciudadanía. Deben preverse también mecanismos adecuados para una eventual recusación de sus decisiones”²⁰.

Para la CorteIDH todos los actos del Estado que afecten los DH Fundamentales “no deben quedar al arbitrio del poder público, sino que deben estar rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución”²¹, es por ello que todas las actuaciones de Chirilagua siempre están en apego a los principios establecidos por esta CorteIDH, la no renovación no se debe a una medida arbitraria del Estado, si no a la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y a nuestra Carta Magna.

A.4.- Potestad de Chirilagua de Administrar el Espectro Radioeléctrico: Los Estados tienen la potestad de administrar el espectro radioeléctrico, de establecer previamente términos de duración de las concesiones y de decidir sobre su renovación a la finalización de los plazos respectivos²². Distintos organismos internacionales

²⁰ La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe (AMARC-ALC).Doc. Comunicación a la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en torno a su decisión de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV).Ver punto nueve (09)

²¹ CorteIDH. OC-6/86, La expresión "leyes" (Art. 30 de la CADH) ,párr 22

²² CIDH. Comunicado de Prensa, Preocupa a La CIDH La Libertad de Expresión en Venezuela, 25 De Mayo De 2007.

reconoce que: "En la utilización de bandas de frecuencias para los servicios de radiocomunicaciones, los Estados tendrán en cuenta que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios, son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica (...)"²³.

El Convenio Europeo para la Protección de los DH y las Libertades Fundamentales Específicamente, en el Art.10, determina que "las Concesión de licencias de radiodifusión se justifica por una serie de razones, incluyendo que las ondas de radio son un recurso público que debe ser utilizado de una manera que sirva al bien público general y que, en ausencia de concesión de licencias, habría caos en las ondas. Estos son argumentos válidos y casi todos los Estados tienen algún sistema para la concesión de licencias de radiodifusión"²⁴.

EL régimen autorizativo tiene su origen en la necesidad de controlar adecuadamente el número reducido de frecuencias disponibles y las importantes inversiones que comporta el establecimiento de emisoras, además de la reserva del poder político de la actividad de radiodifusión"²⁵. Esta atribución legal resulta plenamente legítima, conveniente y razonable, pues obedece tanto a las características particulares del espectro electromagnético del Estado y a las exigencias técnicas de la adjudicación de sus espacios, como al principio de oportunidad que debe regir las actividades de la administración²⁶.

Por otro lado las penas impuestas a la Sra. Pereira, el Sr. Hoffman y el Sr. Garra, de instigación a delinquir y difamación, tipificadas ambas en el Código Penal del Estado, concuerdan con hechos acontecidos en el Facebookazo, estos fueron producto de la incitación al odio de clases e instigación a la violencia promovida por parte de los

²³ UIT. Constitución, Art. 44.

²⁴ CIDH. Presentación, Toby Mendel, "Normas Internacionales sobre la Regulación de la Radiodifusión" 18 de Julio del 2.007. Pág.2

²⁵ TEDH. Caso Groppera Radio AG y otros Vs. Suiza.

²⁶ Ver párr. 22 Caso Hipotético

pequeños medios de comunicación que estos integraban, “por lo que la intervención legítima del Estado comienza cuando la expresión de una opinión o una idea interfiere directamente con los derechos de los demás, o constituyen una amenaza directa y evidente para la vida en sociedad”²⁷.

Además tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, acogidos por la CADH, revisten suma importancia. Es necesario garantizar el ejercicio de ambos. En este sentido, la prevalencia de alguno en determinado caso dependerá de la ponderación que se haga a través de un juicio de proporcionalidad. La solución del conflicto que se presenta entre ciertos derechos requiere el examen de cada caso, conforme a sus características y circunstancias, para apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio²⁸.

Solo a pocos días de la marcha, el tema en la estación de Radical Radio se concentraron en los grupos de la red social Facebook que hacían referencia al Presidente, entre los cuales podríamos encontrar temas como: “Yo también quiero que se muera Atilio Escalante Norris y todos los terratenientes que nos han explotado”, “Los que odiamos, repudiamos y aborrecemos a Atilio Escalante Norris”, “Los ke kieren chingar al señorito Atilio Escalante Norris” entre otros²⁹.

El Estado siempre ha intentado que la información sea manejada con profesionalismo y con un profundo respeto a la ciudadanía, para impedir la proliferación de esa forma grosera del "odio entre los sectores que hacen vida en Chirilagua" que tanto daño le está haciendo a la sociedad y del cual los dueños de medios, son igualmente responsables, por ello el Estado de preocupado por el clima de tensión y de crispación política creada por los medios de comunicación y de los espacio

²⁷ CIDH. Informe sobre la compatibilidad de las leyes de desacato y la CADH, Informe anual, Capítulo V, Parte V.

²⁸ CorteIDH. Caso Kimel Vs. Argentina, párr 51.

²⁹ Ver párr. 17, ver también nota al pie Caso Hipotético.

que promueven el odio entre clases y los conflictos sociales por la disputa de tierra³⁰, sanciono con respeto a las normas previstas en el Estado emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución³¹, a los medios de comunicación y a sus propietarios.

Del segundo requisito, del cual las restricciones deben estar destinadas a proteger, (...) la protecciones de la seguridad nacional, el orden publico (...)”, el Estado es enfático en determinar que los derechos de cada hombre están limitados “(...) por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”³², de acuerdo con las reglas generales establecidas en la Convención, este no es un derecho absoluto, sino que admite restricciones³³, para acomodar su ejercicio con los derechos de los demás, la seguridad de todos y las exigencias del bien común en una sociedad democrática³⁴.

Distintos son los organismos internacionales y declaraciones, pactos y tratados que “exhortan a los grandes medios de información y a quienes los controlan o están a su servicio, así como a todo grupo organizado en el seno de las comunidades nacionales, tengan debidamente en cuenta los principios formulados en la Declaración Universal de DH, en especial el principio de la libertad de expresión, que promuevan la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las personas y los grupos humanos, y a que contribuyan a erradicar el racismo, la discriminación y los prejuicios raciales,

³⁰ Ver párr. 15 Caso Hipotético.

³¹ CorteIDH. OC. 6/86, La Expresión “Leyes” (Art. 30 CADH), párr. 15

³² DADDH. Capítulo primero, Art. XXVIII.

³³ CorteIDH. OC-5/85, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Arts. 13 y 29 CADH), párr. 35.

³⁴ Constitución de la República de Honduras, Art. 72; Constitución de la República de Venezuela, Art. 66; Constitución de la Nación Argentina, Art. 14; Constitución Política de la República de Panamá, Art. 37; Constitución Política de la República de Costa Rica, Art. 29, Constitución da República Federativa do Brasil, Art. 5.IX; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 7; Constitución de la República Oriental del Uruguay, Art. 29; Constitución Política de la República de Chile, Art. 19.12; Constitución Política de República Dominicana, Art. 8.6; Constitución Política del Perú, Art. 2.4; Constitución Nacional del Paraguay, Art. 26 y 29; Constitución Política de Nicaragua, Art. 67 y 68; Constitución Política de la República de Guatemala, Art. 35; Constitución Política de Colombia, Art. 20; Constitución Política de la República de El Salvador, Art. 6.

evitando en particular que se presente a las personas y a los diferentes grupos humanos de manera estereotipada, parcial, unilateral o capciosa”³⁵

Toda ley que limite la libertad de expresión debe también ser "necesaria para asegurar" este propósito legítimo³⁶. La necesidad comporta la existencia de una "necesidad social imperiosa"³⁷, necesidad imperiosa en la que se ve el Estado por los programas de radio en los que se discutió la creación de mas de 50 grupos en la red de Facebook que promueven el odio en contra del Presidente e incitan a la violencia en su contra; así como también la cobertura desproporcionada, incitando además a la violencia, del Facebookazo y los hechos del 3 y 10 de Marzo del 2.008.

En cuanto al tercer requisito, “deben ser necesarias en una sociedad democrática”, el Estado entiende que dentro de sus fines esta: a) asegurar su propia existencia y reproducción como organización, ya que, como todas las organizaciones, está amenazado de un proceso de entropía, es decir, de desorden y degeneración crecientes si no se desarrolla una energía capaz de neutralizarla; b) garantizar la convivencia pacífica dentro de su territorio, lo que no supone la exclusión de los antagonismos, sino su canalización por vías jurídicas; c) asegurar su permanencia como entidad soberana dentro de la comunidad internacional³⁸

Los medios de comunicación y sus dueños, son igualmente responsables por los hechos acontecidos en el Facebookazo, marcha que enviaba el mensaje de que en Chirilagua no existía un Estado democrático, y los hechos posteriores a este, incitando a la violencia y a la desestabilización nacional, manipulando la información porque están conscientes del poder que los medios poseen para influir en la conciencia de las

³⁵ Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, Art. 5.3

³⁶ CorteIDH. Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la CADH.

³⁷ TEDH. Sunday Times Vs. United Kingdom, párr. 59; Lingens Vs. Austria, párr. 40

³⁸ Estado, Manuel García Pelayo 1991, Obras Completas, Madrid, capítulo IV, Pág. 6

personas; y es por ello que los medios de comunicación tienen la responsabilidad moral de difundir la información con un sentido ético para el beneficio de la democracia.

Es por ello que en estos términos se puede explicar la protección de los derechos humanos de aquellos que enfrenta el poder de los medios, de aquellos que deben ejercer tal derecho con responsabilidad y función social³⁹, y el esforzándose por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas⁴⁰, expresión equitativa que se quebranta con la excesiva cobertura de Radical Radio de las redes sociales que hacían referencia al Presidente.

A.5.-Estricta formulación de la norma que consagra la limitación o restricción (legalidad penal): Los hechos acontecidos el 3 de Marzo de 2008, donde en varias marchas se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y seguidores del partido oficialista, como producto estos disturbios, 6 personas murieron y 15 más resultaron heridas⁴¹, lo que justifica las medidas penales de instigación a delinquir y difamación contra la Sra. Pereira, el Sr. Hoffman y el Sr. Garra.

La tipificación penal de estos delitos en el Estado satisfacen el ámbito del principio de legalidad, utilizando términos precisos, unívocos y sin ambigüedades que determinan la conducta típica desplegada por el sujeto activo y su amoldamiento al tipo penal, es decir, esto implica una clara definición de la conducta incriminada, que fija sus elementos y permite deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales⁴². En consecuencia, la protección de la honra y reputación de toda persona, así como la protección de la democracia son fines legítimos acorde con la CADH. Asimismo, el instrumento penal es idóneo porque sirve el fin de

³⁹ CorteIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párrs. 117 y 118.

⁴⁰ CorteIDH. Caso Kimel Vs. Argentina, párr. 57; OC-5/85 “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Arts. 13 y 29 CADH), párr. 34.

⁴¹ Ver párrs.8 y 26 Caso Hipotético

⁴² CorteIDH. Caso Castillo Petrucci y otros Vs. Perú, párr. 121; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, párr. 125. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, párr. 124; Caso Kimel Vs. Argentina, párr. 63

salvaguardar, a través de la conminación de pena, el bien jurídico que se quiere proteger, es decir, podría estar en capacidad de contribuir a la realización de dicho objetivo⁴³.

La sanción impuesta a la Sra. Pereira y el Sr. Hoffman fue de dos años de prisión en el caso de hurto de bienes del Estado, pena conmutable por una multa equivalente a 200.000 dólares a cargo de la Federación y de seis meses de prisión o el pago de 15.000 dólares en el caso de instigación a delinquir y difamación⁴⁴, por lo que estas poseen el propósito legítimo de proteger la seguridad y la democracia del Estado y el honor de un funcionario público.

En cuanto a la sanción impuesta al Sr. Garra, por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de dos civiles y un elemento policial, se vincula directamente sus declaraciones a estas muertes, ya que en algunos de sus programas transmitidos radialmente instan a la población a defender “a toda costa sus derechos contra la avanzada totalitaria de la oligarquía terrateniente⁴⁵”.

Esta misma CorteIDH no estima contraria a la CADH cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, lo que se amolda a la sentencia proferida por el Tercer Juzgado Criminal de Delitos Federales, después de un análisis de la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado⁴⁶.

Por último es importante resaltar que bajo el análisis de los hechos del caso, se considera si la restricción resulta estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a aquella no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que

⁴³ CorteIDH. Caso Kimel Vs. Argentina, párr. 71.

⁴⁴ Ver párr. 37 Caso Hipotético.

⁴⁵ Ver párr. 18 Caso Hipotético.

⁴⁶ CorteIDH. Caso Kimel Vs. Argentina, párr. 78.

se obtienen mediante tal limitación⁴⁷. Las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 de la CADH garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión⁴⁸, lo que el Estado ha cumplido a cabalidad dichas premisas.

B.-El Estado de Chirilagua ha respetado Art. 8 de la CADH, en relación con las obligaciones emanadas por los Arts. 1.1.

El Estado entiende que el derecho a la garantía judicial en esencia, es el derecho de toda persona a “ser oída públicamente⁴⁹ y con justicia por un tribunal independiente e imparcial⁵⁰, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación”⁵¹ y dentro de un plazo razonable.⁵²

Es así, como la esencia del derecho al debido proceso legal es el tenor del *corpus iuris* internacional⁵³ y es de especial importancia porque junto con el derecho a un recurso, tutela todos los derechos de las personas⁵⁴, en este mismo sentido, respecto a la

⁴⁷ CorteIDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador, párr. 93.

⁴⁸ CorteIDH OC-5/85, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” (Arts. 13 y 29 CADH), párr. 46; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párrs. 121 y 123; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, párr. 85; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, párr. 91.

⁴⁹ CorteIDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, cit. voto razonado del juez de Roux Rengifo; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, cit. voto disidente de los jueces Abreu Burelli y Medina Quiroga, párr. 1.

⁵⁰ CorteIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párrs. 137.3.b) y 170; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, párrs. 124, 145 y 180; Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, párr. 74; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, párr. 161; Caso Cesti Hurtado Vs Perú, párr. 149; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, párr. 192

⁵¹ Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 10

⁵² TEDH. Berger, Vincent, 10ª edición. Sirey, Paris, 2007, págs. 391-393; Caso Motta Vs. Italia, párr. 30; Caso Ruiz Mateos Vs. España, párr. 30; CorteIDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, párr. 77; Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, párr. 66; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párr. 93; Caso López Álvarez y otros Vs. Honduras, párr. 129.

⁵³ Derecho Internacional de los DH. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DH. Primera Edición. Bogotá Abril 2004. Pág. 349.

⁵⁴ Derecho Internacional de los DH. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DH. Primera Edición. Bogotá Abril 2004. Pág. 349.

expresión de garantías judiciales, sean administrativa, legislativa o judicial⁵⁵, representa los medios procesales que "sirven para proteger, para asegurar o hacer valer la titularidad de un derecho (...) vale decir, los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia⁵⁶ para que se dé una propia y verdadera garantía judicial⁵⁷.

B.1.-Eficacia e Independencia de los Órganos del Estado: Fomentándonos en lo anteriormente expuesto, el Estado de Chirilagua está consciente de sus obligaciones para con cada una de las personas dentro de su jurisdicción en el libre y pleno ejercicio de sus derechos, por esto ha creado un sistema jurisdiccional lo suficientemente efectivo para brindar las debidas garantías emanadas del artículo 8 de la Convención, garantías que han arropado a Sr. Dayle, Sra. Pereira, Sr. Hoffman y Sr. Garra en los diferentes procedimientos llevados en contra de los mismos tanto en instancias administrativas como judiciales.

La aplicación de las garantías del Art.8 de la CADH, como ya anteriormente se ha dicho, no sólo son exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional⁵⁸, para así obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas.⁵⁹

Para el Estado es importante que toda persona sea oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión igualmente se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a

⁵⁵ CorteIDH. O/C 11/90 "Excepciones al agotamiento de Recursos Internos". párr. 28.

⁵⁶ CorteIDH. O/C- 9/87. Garantías Judiciales en Estado de Emergencia Párr. 27 y 28.

⁵⁷ Derecho Internacional de los DH. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DH. Primera Edición. Bogotá .Abril 2004. Pág. 351.

⁵⁸ CorteIDH Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. párr. 124.

⁵⁹ CorteIDH Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, párr. 127.

través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas⁶⁰. Por la razón mencionada, se considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la CADH⁶¹

Es Imperioso para la defensa del Estado, por otro lado, determinar que la CorteIDH no es competente para dirimir sobre si en el ámbito interno se emitieron sentencias o resoluciones administrativas, o si se aplicaron o no determinadas disposiciones de derecho interno, en relación con las violaciones que se alega fueron cometidas en perjuicio de las presuntas víctimas de los hechos, sino si los procesos internos permitieron que se les garantizara un verdadero acceso a la justicia, conforme a los estándares previstos en la CADH, para determinar los derechos que estaban en controversia⁶², cuestión que los representantes de las víctimas quieren hacer ver a esta CorteIDH.

Por esta razón, el Estado tanto en el proceso de cierre de concesión de la emisora Radical Radio, como en el proceso judicial llevado en contra de los ciudadanos antes mencionados actuó de forma garante asumiendo la función de garantizar la protección de ciertos bienes a favor de determinadas personas⁶³, sin embargo, ser garante no implica relevar al sujeto en sus decisiones y actuaciones, sino aportar los medios para que pueda decidir y actuar del mejor modo posible, desenvolver sus potencialidades y cumplir su destino⁶⁴

⁶⁰ CorteIDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, sentencia del 31 de enero del 2001, párrafo 71.

⁶¹ CorteIDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, párrafo 124.

⁶² CorteIDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, párr. 339; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, párr. 206; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, párr. 211; Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú, párr. 107.

⁶³ CorteIDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, cit. voto del juez Sergio García Ramírez. Párr. 8

⁶⁴ CorteIDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, cit. voto del juez Sergio García Ramírez. Párr. 9.

B.2.- Imparcialidad de la COFERETEL: Esta misma CorteIDH ha precisado que "uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitución"⁶⁵ Bajo esta misma línea, el Estado cuenta con COFERETEL, órgano administrativo, cuya primera actuación data del 2001, atendiendo al proceso de cambio de nombre de la emisora Radio Cadena Básica a Radical Radio⁶⁶, lo que denota, que las sanciones impuestas a Radical Radio y Radio Su-Versión respectivamente, fueron dictadas por un órgano que ya se encontraba preestablecido.

Así mismo el Estado ha desarrollado un sistema institucional que permite a cada uno de sus ciudadanos acceder a los órganos jurisdiccionales, elemento que representa pilar fundamental para el ejercicio pleno del derecho y libertades de cada persona y para la tutela y protección de un bien jurídico infringido, en el caso de marras, las presuntas víctimas, contaron en todo momentos con órganos competentes dispuestos a dar una respuesta oportuna sin ningún tipo de dilación o barrera que retarde el otorgamiento de una posible solución, hecho evidente en fecha 10 de Abril del 2008 cuando el Sr. Dayle pudo acceder plenamente al juez competente sin ningún tipo de obstáculo para la solicitud de declaración de nulidad de la decisión administrativa⁶⁷.

En otras palabras, todas las personas tienen el derecho de acceder al sistema judicial, para que los órganos llamados a resolver su pretensión la estudien y emitan una resolución motivada conforme a derecho⁶⁸.

⁶⁵ CorteIDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párr. 73.

⁶⁶ Ver párrs. 12, 13, 14 Caso Hipotético.

⁶⁷ Ver párr. 34 Caso Hipotético

⁶⁸ La Conciliación extrajudicial obligatoria como derecho constitucional y como límite al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Jaime David Abanto Torres. Pág. 8

Reiterando una vez más la conducta garante del estado acoplada a los principios y obligaciones emanadas de la convención en la cual las supuestas víctimas la Sra. Pereira y el Sr. Dayle contaron con el libre y pleno ejercicio de sus derechos al acceder al Segundo Tribunal del Circuito de Ceudópolis interponiendo una acción de constitucionalidad⁶⁹ y en fecha 5 de Mayo de 2008 el Sr. Hoffman presenta una acción de constitucionalidad en contra de COFERETEL⁷⁰.

B.3.- Imparcialidad de los Órganos Judiciales: Considerando, que la independencia de la judicatura es garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país⁷¹, Chirilagua, cuenta con Tribunales naturales, imparciales y competentes⁷²

Los procesos judiciales llevados en contra de la Sra. Pereira, Sr. Hoffman, el Sr. Dayle y el Sr. Garra, fueron ante el Primer y Tercer Juzgado Criminal De Delitos Federales⁷³, órgano creado de igual modo con anterioridad a los hechos suscitados y conformado por jueces competentes, imparciales e independientes de acuerdo a la autonomía de los poderes como garantía a un juicio justo debidamente tutelado. Tomando en cuenta que, la CorteIDH, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea, ha señalado que "la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas".⁷⁴ Cumpliendo así, con la separación de los poderes en garantía de la independencia de los jueces⁷⁵.

⁶⁹ Ver Párr. 35 Caso Hipotético

⁷⁰ Ver Párr. 35 Caso Hipotético

⁷¹ Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985

⁷² Caso Tribunal Constitucional, sentencia del 31 de enero del 2001, párrafo 77.

⁷³ Ver párrs. 37, 38 Caso Hipotético.

⁷⁴ CorteIDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párr. 75.

⁷⁵ CorteIDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párr. 73.

En su acepción general, el acceso a la justicia supone la disponibilidad efectiva de causas institucionales destinados a la protección de derecho y a la resolución de conflictos de variada índole de manera oportuna y con base al ordenamiento jurídico⁷⁶ y además el cabal funcionamiento de las instancias ante las cuales se canalizan las demandas de justicia es un factor capital en la construcción de civilidad o ciudadanía.

El proceso "es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia", a lo cual contribuyen "el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal"⁷⁷

B.4.- Garantías mínimas de los procesos judiciales: Ahora bien, cada uno de los procesos accionados, tanto por las presuntas víctimas como por el Ministerio Público estuvo revestido del debido proceso y de cada una de las garantías mínimas que conforman este derecho. Ya que si bien es cierto, que el artículo 8° de la CADH no especifica una lista de *garantías mínimas* en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, como lo hace en el numeral 8.2 al referirse a materias penales, la CorteIDH ha señalado que "el elenco de *garantías mínimas* (previstas en el artículo 8.2 de la CADH) se aplica también a esos órdenes y, por ende, en este tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal"⁷⁸

B.5.- Comunicación previa y detallada de la acusación formulada y tiempo y de los medios adecuados para su defensa: Por un lado, a contar con el tiempo adecuado para preparar la defensa, y por el otro, a contar con los medios, igualmente adecuados, para tal efecto. Esto implica diversos aspectos, como por ejemplo, acceder a documentos y

⁷⁶ Acceso a la Justicia, Universidad por la vigencia efectiva de los Derechos Humanos. Autor Jesús María Casal. Konrad- Andenauer- Stiftung, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Canadian International Development Agency, Instituto Interamericano de Derecho Humanos (IIDH).

⁷⁷ CorteIDH. OC-16/99 "El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal", párr. 117.

⁷⁸ CorteIDH. Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, párr. 70; OC-11/90. "Excepciones al agotamiento de los recursos internos", párr. 28; Caso Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala, párr. 149; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párr. 70; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, párr.125.

pruebas con una antelación suficiente para preparar la defensa, ser informado con anticipación de las actuaciones judiciales y poder participar en ellas.⁷⁹

A la luz de esta garantía que conforma el debido proceso las presuntas víctimas en todo momento fueron informadas y puestas a derechos, referentes a los cargos por los cuales estaban siendo imputados tanto en la vía judicial como administrativa.

Desprendiéndose de los hechos que en el proceso administrativo llevado en contra de Radical Radio, esta fue informada en fecha 5 de Marzo de 2008 acerca de las respectivas revisiones que se harían en a las diferentes radios y televisoras, poniendo a derecho a la emisora antes mencionada para la respectiva actualización de los datos y cumplimientos de los requisitos establecidos en la ley y siendo cancelada la concesión en fecha 6 de abril de 2008, otorgándoseles treinta días para el respectivo cumplimiento de los requerimientos y para su respectiva defensa.⁸⁰

En este mismo sentido en fecha 14 de Julio de 2008 el Sr. Dayle, El Sr. Hoffman y la Sra. Pereira son acusados formalmente por el delito de hurto de bienes ante el Primer Juzgado Criminal de delitos federales y siendo sentenciados en fecha 8 de Noviembre de 2008,⁸¹ otorgándoles un plazo de tres meses y quince días para su respectiva defensa en conocimiento de los cargos por los cuales estaban siendo imputados, así mismo en fecha 20 de Julio de 2008 el Sr. Dayle, Sr. Hoffman y la Sra. Peroni.

Fueron imputados por los delitos de instigación a delinquir siendo enjuiciados en fecha 15 de Septiembre de 2008⁸² contando con tres meses y tres días para su defensa

⁷⁹ El Debido Proceso en las decisiones de la CorteIDH de la CADH (análisis del artículo 8° de Documento de Trabajo de la Comisión Andina de Juristas, elaborado por Luis Alberto Huerta Guerrero, investigador de la institución, con la colaboración de Luis Enrique Aguilar Cardoso) Pág. 25

⁸⁰ Ver párr. 29 Caso Hipotético.

⁸¹ Ver párr. 37 Caso Hipotético.

⁸² Ver párr. 38 Caso Hipotético.

demostrándose una vez más que las presuntas víctimas contaron con un plazo suficiente para su respectiva defensa.

Así también el Sr. Garra contó con un lapso de tres meses y veintiocho días para su respectiva defensa en conocimiento de los cargos por los cuales estaba siendo imputado, reiterándose una vez más el cumplimiento de las obligaciones generadas en las garantías judiciales.

La CorteIDH ha establecido en jurisprudencias que "efectivamente, los inculcados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de los defensores fueron meramente formales. No se puede sostener que las víctimas contaron con una defensa adecuada"⁸³

A la luz de este criterio establecido las presuntas víctimas en todo momento fueron informadas y puestas a derechos, referentes a los cargos por los cuales estaban siendo imputados tanto en la vía judicial como administrativa. Reiterándose el cumplimiento de la obligación de garantizar, tomando en cuenta que las presuntas víctimas contaron con más de tres meses en relación, situación distinta observada en Chirilagua en comparación con el lapso de un día al cual la corte hizo referencia en la jurisprudencia antes mencionada.

B.6.- Doble Instancia: Para la vigencia de esta garantía, no basta con el reconocimiento formal del derecho de apelación, sino que además se deben eliminar todos aquellos obstáculos que impidan ejercerlo, tales como la exigencia de demasiados requisitos formales o plazos muy breves para su interposición. El ejercicio del derecho de recurrir

⁸³ Corte IDH. Caso Castillo Petrucci Vs. Perú, párr. 141

del fallo ante juez o tribunal superior, como es lógico suponer, implica que toda persona tiene derecho a disponer, en un plazo razonable y por escrito, de los fallos dictados en la determinación de su responsabilidad, debidamente motivados, a efectos de su posible apelación.⁸⁴

El Estado entiende la importancia que representa esta garantía para la efectiva protección y ejercicio de los derechos de toda persona, las presuntas víctimas en todo momento contaron con el recurso de apelación pudiendo interponerlo sin ningún tipo de barrera y obteniendo respuestas en un lapso promedio de siete a quince días en todos los procesos llevados a cabo en contra de las presuntas víctimas.⁸⁵

C.- El Estado de Chirilagua ha respetado Art. 25 de la CADH, en relación con las obligaciones emanadas por los Arts. 1.1.

El estado de Chirilagua en armonía con lo establecido por la CorteIDH reconoce la protección judicial como” el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier

Otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra Actos que violen sus derechos fundamentales, constituyendo uno de los pilares básicos, no sólo de la CADH, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, en el sentido de la CADH. El artículo 25 se encuentra íntimamente con la obligación general del artículo 1.1 de la CADH al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes”⁸⁶

Así mismo la protección judicial ofrecida en el Art.25 de la CADH no se

⁸⁴ El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)Derechos Humanos (análisis del artículo 8° de Documento de Trabajo de la Comisión Andina de Juristas, elaborado por Luis Alberto Huerta Guerrero, investigador de la institución, con la colaboración de Luis Enrique Aguilar Cardoso) Pág. 30

⁸⁵ Ver párr. 37, 38 y 39 Caso hipotético.

⁸⁶Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú, párrs. 82-83; Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, párr. 65; Caso Blake Vs. Guatemala, párr. 102; Caso Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala, párr. 164; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, párr. 101; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, párr. 112; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, párr. 150, entre otros.

satisface mediante cualquier instrumento procesal. En primer término se requiere que dicho instrumento procesal este rodeado de las garantías básicas contempladas en el Art. 8 de la CADH en lo que atañe a las características del órgano competente y del proceso seguido.⁸⁷

En este mismo sentido el estado de Chirilagua es consciente que “la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la CADH, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley”⁸⁸ por esta razón el Estado dentro de su legislación consagra diferentes recursos que cumplen con los requisitos para la efectiva protección de los derechos inherentes a cada ciudadano chirilanguense destacando la acción de constitucionalidad⁸⁹ recurso provisto de todos los elementos que constituyen un recurso judicial efectivo.

Tomando en cuenta que “para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los DH y proveer lo necesario para remediarla”⁹⁰, que “no basta que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos, para que éstos puedan ser considerados efectivos”.⁹¹

Que “los recursos deben ser idóneos para proteger la situación jurídica infringida

⁸⁷ Casal H, Jesús María: “Los DH y su protección” Universidad Católica Andrés bello. Venezuela. 2006. Pág. 111.

⁸⁸ Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párr. 89; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, párr. 111; Caso Cantos Vs. Argentina, párr. 52; OC-9/87. “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia” (arts. 27.2, 25 y 8 CADH), párr. 23, entre otros.

⁸⁹ Ver Párr. 35 Caso Hipotético

⁹⁰ Corte IDH, Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, párr. 102; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, párr. 164; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, párr. 136; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, párr. 113; OC-9/87. “Garantías judiciales en estados de emergencia”, (arts. 27.2, 25 y 8 CADH), párr. 24, entre otros.

⁹¹ Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, párr. 111; Caso Cantos Vs. Argentina, párr. 52; Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, párr. 121; Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala, párr. 117, entre otros.

y capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos”,⁹² a la luz de estos principios Chirilagua, de conformidad con sus obligaciones generadas del Art. 1.1, se ha encargado de que el recurso de acción de constitucionalidad cumpla con cada una de las cualidades y requisitos antes mencionados, para que cada ciudadano cuente con una garantía fundamental que jamás puede ser minimizada y que constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho en una sociedad democrática”⁹³

En este mismo sentido este derecho a arropo a las presuntas víctimas a lo largo de los diferentes procesos llevados en su contra, siendo ejercido primeramente por el Sr. Dayle y la Sra. Pereira en fecha 30 de Abril de 2008 ante el Segundo Tribunal de Circuito de Ceudópolis en contra de la legalidad del no otorgamiento de la concesión a favor de Radical Radio demostrándose y en fecha 5 de Mayo de 2008 cuando el Sr. Hoffman que en todo momento “se les brindo la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del artículo 25 de la CADH.”⁹⁴

Ahora, si bien es cierto que los recursos interpuestos por la presuntas víctimas no se logro el resultado de sus pretensiones, esto no demuestra que en el Estado no exista un recurso efectivo tomando en cuenta “que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que resulten ineficaces por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, lo cual puede ocurrir, por ejemplo”, "cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para

⁹² Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párrs. 64 y 66; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, párrs. 67 y 69; Caso Fairén Garbí y Solís Corrales Vs. Honduras, párrs. 88 y 91; OC-11/90: “Excepciones al agotamiento de los recursos internos” (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b CADH), párr. 36.

⁹³ Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, cit. Voto disidente del Juez. A.A. Cancado Trindade, párr. 18,21; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, 70 párr. 191; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, párr. 101.

⁹⁴ Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala, párr. 164; Caso Cesti Hurtado Vs. Perú, párr. 125; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, párr. 191; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párr. 90, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, párr. 114, entre otros

ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial"⁹⁵

El recurso de acción de constitucionalidad es la más idóneo para la protección de los derechos e inclusive para la protección de los que presunta violación de los derechos⁹⁶, que el tribunal que conoció del recurso fue primeramente el tribunal de circuito de Ceudópolis organismo totalmente independiente de COFERTEL. Por ende, se demuestra que el tribunal revestía de imparcialidad e independencia a la luz de que no existía ni se demuestra que el mismo tenga algún interés especial o exista una conducta predeterminada a los hechos del caso, no existe ningún cuadro de denegación de justicia ante la interposición del recurso.

Ahora bien, puede decirse que en la noción de “efectividad” desarrollada por la CorteIDH puede distinguirse dos aspectos: Normativo y empírico:⁹⁷

a) Un aspecto *normativo*, relacionado con la “idoneidad” del recurso. En términos de la CorteIDH, la “idoneidad” de un recurso significa su capacidad “para establecer si se ha incurrido en una violación a los DH y proveer lo necesario para remediarla”, y su posibilidad de “dar resultados o respuestas a las violaciones de DH”⁹⁸. Nos situamos en el plano del diseño normativo del recurso: este debe ofrecer la posibilidad de plantear como objeto la violación de un derecho humano (y, como vimos,

⁹⁵ CorteIDH. OC-9/87, “Garantías judiciales en estados de emergencia”, párr. 24; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, párr. 137.

⁹⁶ Ver Preguntas y Respuestas, Caso Hipotético.

⁹⁷ Courtis C., El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos, en Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis (comp.) “La aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década (1994-2005)”, Buenos Aires, CELS y Del Puerto, en Prensa.

⁹⁸ CorteIDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, párr. 102; Caso Cantoral Benavides, párr. 164; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, párr. 136; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua., párr. 113; OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia” (Arts. 27.2, 25 y 8 CADH), párr. 24, entre otros.

de otros derechos fundamentales), y de obtener remedios adecuados frente a esas violaciones.⁹⁹

A la luz de este criterio el recurso de acción de constitucionalidad en ningún momento perdió su idoneidad tomando en cuenta que en todo momento las supuestas víctimas tuvieron la oportunidad de plantear la presunta violación de un derecho obteniendo una respuesta la cual fue negativa tomando en cuenta que su pretensión no se amoldaba a los requisitos establecidos en la ley para declarar la nulidad de la cancelación de concesión.

b) Un aspecto *empírico*, relacionado con las condiciones políticas e institucionales que hacen posible que un recurso previsto normativamente pueda “cumplir con su objeto” u “obtener el resultado para el que fue concebido”. En este segundo sentido, un recurso no es efectivo cuando es “ilusorio”, demasiado gravoso para la víctima, o cuando el Estado no asegurado su “debida aplicación (...) por parte de sus autoridades judiciales”.¹⁰⁰

Existen ciertas características básicas que éstos deben presentar a fin de ser considerados "idóneos": a) que se trate de recursos sencillos, urgentes, informales, accesibles y tramitados por órganos independientes; b) que se cuente con la posibilidad de acceder a instancias judiciales federales o nacionales ante la sospecha de parcialidad en la actuación de los órganos locales; c) que se garantice una legitimación activa amplia; d) que puedan tramitarse como recursos individuales e igualmente como acciones cautelares colectivas (para proteger a un grupo determinado o determinable

⁹⁹ Courtis C., El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos, en Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis (comp.) “La aplicación de los tratados de DH en el ámbito local. La experiencia de una década (1994-2005)”, Buenos Aires, CELS y Del Puerto, en Prensa. Pág. 39

¹⁰⁰ CIDH. El acceso a la justicia como garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de DH, párr. 251.

conforme a ciertos parámetros, afectado o bajo situación de riesgo inminente); y e) que se prevea la aplicación de medidas de protección en consulta con los afectados¹⁰¹

El Estado tomando en cuenta estos criterios pasa a relacionarlos con los hechos del caso: en referencia al punto “a” las supuestas víctimas pudieron interponer el recurso sin ningún tipo de barrera, de una forma informal y accesible pudiendo estos alegar y plantear su pretensión ante un organismo competente e imparcial como el tribunal de circuito de Ceudópolis; ahora bien igualmente el punto “b” las presuntas víctimas contaron con un tribunal alzada como la corte de apelación y el tribunal de apelación de Gorgia, en caso de que sospecharan cierta imparcialidad, haciendo uso las víctimas del mismo en fecha 2 de junio del 2008 y el 30 de mayo de 2008¹⁰².

Por otro lado las partes en todo momento contaron con una participación activa y legítima pudiendo desprender sus alegatos e incluso apelar la decisión tal como antes mencionamos (punto “b”) y por último, en relación al punto “d” si bien es cierto que los recursos fueron interpuestos debidamente por el Sr. Dayle, la Sra. Pereira y el Sr. Hoffman estas fueron en representación de Radical Radio y Radio su Versión lo cual significa que el recurso amparo a un colectivo como lo representa los trabajadores de dichas emisoras.

Para el Estado importante destacar que las presuntas víctimas en todo momento contaron con el recurso sin temor a realizar algún tipo de pago, permitiéndoseles la mayor accesibilidad a la interposición del recurso, a la luz de lo establecido por la corte al hacer referencia “Que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los Tribunales”.¹⁰³

¹⁰¹ Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, Pág., 35 y 36

¹⁰² Ver caso hipotético Párr. 35 y 36

¹⁰³ CorteIDH, Caso Cantos Vs. Argentina, párr. 55.

Así mismo la sencillez y rapidez del recurso quedo demostrado en ambas solicitudes o interposiciones de la acción de constitucionalidad hecha por el Sr. Dayle, la Sra. Pereira y posteriormente por el Sr. Hoffman,¹⁰⁴ ambos obteniendo respuesta en un lapso menor de veintiún días, demostrándose la celeridad y la rapidez de proceso de respuesta ante la interposición de la acción constitucionalidad. Tomando en cuenta que “los recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (Art. 8.1)”¹⁰⁵

VI.-Petitorio

Por las consideraciones expuestas precedentemente, el Estado solicita respetuosamente a la Honorable CorteIDH, que declare que Chirilagua no es responsable internacionalmente por la supuesta violación a los Art.8, 13 y 25, todos relacionados con el Art.1.1 de la CADH, en perjuicio de las presuntas víctimas del presente caso, por lo que no puede reclamársele ningún deber de reparación a su cargo.

¹⁰⁴ Ver Párr. 35 y 36 Caso hipotético

¹⁰⁵ Corte IDH, Casos Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente; OC-9/87, “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia” (arts. 27.2, 25 y 8 CADH), párr. 24; A. A. Cançado Trindade, “Sobre la protección judicial y las garantías del debido proceso legal bajo la CADH, Hong Kong, University of Hong Kong, 1997. Párr.4, -11; A.A. Cançado Trindade, “Protección Judicial y Garantías en los Casos Recientes de la CADH”. (In Liber Amicorum in Memoriam of Judge J.M. Ruda). The Hague, Kluwer. 2000. párr. 527-535.